



Banco Azteca y las tarjetas Bienestar: Un contrato millonario con dinero destinado a los pobres

(Álvaro Delgado, pág. 6-8)

Banco Azteca aseguró al inicio del sexenio que, como “el aliado ideal” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cobraría ninguna comisión por manejar las tarjetas para entregar los recursos de los programas sociales a los beneficiarios.

No era cierto.

Y afirmó que no había firmado un contrato para ese propósito.

Tampoco era cierto.

El banco del magnate Ricardo Salinas Pliego no sólo cobra cientos de millones de pesos al año por el manejo de las tarjetas de Bienestar para los más pobres de México, sino que, para ello, firmó un contrato con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando la oficial mayor era Raquel Buenrostro, funcionaria de toda la confianza de López Obrador.

Mientras que el español BBVA, considerado el banco más caro de México, no impone ningún costo por el manejo de las cuentas de los programas sociales federales, Banco Azteca le cobra al gobierno de López Obrador cinco pesos al mes, más 80 centavos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el “mantenimiento” de cada una de ellas.

Así, por el cobro de 60 pesos anuales por los cinco millones de tarjetahabientes de los programas de bienestar que atendió sólo en 2019, Banco Azteca le cobró 300 millones de pesos al gobierno de López Obrador, sin incluir el IVA, además de controlar la base de datos de los programas sociales y mantener cautivos a los beneficiarios.

Costosas "asesorías especializadas" del exembajador Sarukhán

(J. Jesús Esquivel, pág. 9-10)

En el último tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dirigida por Luis Videgaray autorizó el gasto de unos 126 mil dólares repartidos en mensualidades para pagarle “asesorías” al exembajador mexicano Arturo Sarukhán.



“La embajada de México en Estados Unidos de América suscribió un contrato con el embajador Sarukhán (Sarukhan and Associates) para recibir servicios de asesoría especializada”, consigna el contrato firmado el 15 de agosto de 2017 y del cual Proceso tiene una copia.

Los “servicios especializados” de Sarukhán estaban “relacionados” con la “coyuntura política estadounidense y sus efectos en la relación bilateral México-Estados Unidos en los ámbitos comercial, migratorio, fronterizo, de seguridad y política exterior”, se lee en el documento titulado “Servicios de Asesoría Especializada de Arturo Sarukhán/Sarukhan and Associates para la Embajada de México en Estados Unidos de América”.

En la época en la que Sarukhán asesoraba a la embajada mexicana –que estaba bajo la conducción de Gerónimo Gutiérrez–, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetía con críticas y sarcasmos al gobierno de Peña Nieto. De hecho, lo obligó a renegociar la relación comercial.

Es inusual que una embajada de México contrate los servicios de un exembajador que previamente fue titular de la misma sede diplomática, y más si fue representante de un gobierno opositor al que estaba en funciones.

Además llama la atención el gasto de decenas de miles de dólares para pagar los servicios de Sarukhán, cuando Videgaray presumía su amistad y cercanía con Jared Kushner, asesor y yerno de Trump.

De acuerdo con un miembro del servicio exterior de México que en esos años laboró en la embajada en Washington, lo que ocurrió fue que Sarukhán estaba sin empleo y Videgaray le hizo un favor.

“A todos nos llamó la atención que lo contrataran para dar asesorías que no hacían falta, pero sobre todo porque al embajador Sarukhán lo tenía vetado el entonces presidente Peña Nieto y no lo reactivó como representante de México”, comenta el diplomático mexicano.

Además de la copia del contrato, Proceso también tiene en su poder el duplicado de la factura con el folio EMB-101 con fecha del 30 de agosto de 2017 y del cheque 40490, de la cuenta número 15241955 perteneciente a la embajada mexicana en Citibank. Ambas copias documentan el pago de 7 mil dólares a Sarukhán por sus servicios prestados en el octavo mes de 2017.

“Si bien el contrato firmado en la ciudad de Washington, DC, el 15 de agosto de 2017, abarcó el periodo de agosto a diciembre de ese año, el embajador Sarukhán proporcionó asesoría a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la embajada desde algunos meses antes”, dice el convenio.



No existen las víctimas

(Javier Sicilia, pág. 77)

El pasado 20 de febrero se cumplieron dos años del asesinato de Samir Flores, una de las figuras fundamentales de la resistencia indígena contra la lógica depredadora de los megaproyectos y la destrucción de las vidas comunitarias y pueblerinas. Se cumplieron también dos años de impunidad. Nada sabemos de los responsables del crimen que sucedió tres días antes de que AMLO, mediante su entonces delegado Hugo Eric Flores, realizara una de sus consultas manipuladas para imponer la termoeléctrica de Huesca, parte del Proyecto Integral More los (PIM). Sabemos, en cambio, que el proyecto se llevará a cabo sobre el cadáver de Samir y sobre la negativa de los pueblos indígenas.

Samir es el rostro emblemático de todas las víctimas sepultadas bajo los caprichos "neoliberales" de AMLO. Debajo del PIM, del Tiren Maya, de Dos Bocas, de la expropiación de tierras ejidales para el aeropuerto Felipe Ángeles, se acumulan crímenes irreparables que a pocos importan. Semejante a la lógica del crimen organizado y del "neoliberalismo", en la lógica del poder político, que empantana expedientes e investigaciones criminales, lo que está en juego es el control del territorio y de la gente. Las víctimas son meras externalidades negativas que pagan los familiares. Son meros objetos prescindibles en el juego económico del poder-

La muerte de Samir, y con ella la de decenas de indígenas y activistas asesinados, no le importan a AMLO ni a Sánchez Cordero ni a Encinas ni a Gertz Mañero ni a Cuauhtémoc Blanco ni a Uriel Garmona (el procurador de Morelos), Tampoco al gobierno federal ni a los gobiernos de Guerrero y de Baja California ni a los partidos que los postulan les importan las mujeres vejadas por Salgado Macedonío y por Hank Rhon, mucho menos las sospechas que pesan sobre ellos por vínculos con el crimen organizado y, en consecuencia, con asesinatos y desapariciones. Por ello, al igual que Samir, Basilia Castañeda -hoy el rostro de todas las mujeres violentadas por el poder- no cuenta. Es una externalidad negativa más. Incómoda, como en su momento incomodaron Samir o Mariana Sánchez. Pero pronto, cuando deje de ser noticia y la prensa haya devorado la parte de su persona que le corresponde, dejará de existir.

Incluso en aquellos gobernadores, funcionarios o capos señalados, acusados o vinculados a procesos por corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero, asociación delictiva, las víctimas tampoco existen. A ninguno se le relaciona con los asesinatos, los feminiridios, las masacres que acompañan a ese tipo de delitos. Hay un pacto de silencio y de impunidad contra las víctimas.

La lógica del "neoliberalismo" ha transformado a los seres humanos en cosas, en mercancías que como las reses (res es "cosa" en latín) pueden ser destazadas para provecho de las carnicerías y sus consumidores. Su vida es nada.



En este sentido ni AMLO ni la 4T ni Morena se diferencian de Felipe Calderón y el PAN, de Peña Nieto y el PRJ ni de cualquier líder de partido, Tampoco se diferencian de los empresarios "neoliberales" que tanto dicen despreciar. El argumento ad nauseam de "no somas iguales" del presidente no hace más que confirmarlo. La necesidad de reiterarlo cuando nadie se lo pregunta debería confrontarlo con uno de esos adagios que tanto le gusta utilizar: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces". Para él, como para cualquier empresario "neoliberal" o cualquier político sometido a la lógica depredadora del desarrollo - base del "neoliberalismo"-, llámese Calderón, Peña Nieto, Salinas y la mayor parte de quienes nos han gobernado y gobiernan, la gente, como cualquier realidad convertida en recurso, es utilizable. Sirve, en este caso, para concentrar poder, riqueza y territorio. Si hay que matarla, desaparecerla o dejar que la maten, la torturen, la violen o desaparezcan, que así sea. Son los residuos inherentes a cualquier proyecto político basado en la acumulación de poder y dinero. En la era de la banalidad y el shom, donde todo no sólo es líquido, sino licuante, el poder implica desechar lo que no sirve. Es la base del "neoliberalismo" que lo mismo genera desechos radiactivos que desechos humanos. Samir Flores, Basilia Castañeda, los 43 de Ayotzinapa, las muertas de Juárez, las mujeres y los niños LeBarón masacrados en Bavispe, el exterminio de los migrantes en San Fernando y recientemente en Tamaulipas, el de los albañiles de Tonalá, el de mi hijo Juan Francisco y sus seis amigos (la lista es interminable) pertenecen a estos últimos. No existen en el juego del poder. O si existen -otra forma de la inexistencia- lo son como cifras y expedientes que se acumulan en las procuradurías y los juzgados o como rostros desesperados en las mesas de los Ministerios Públicos. Son extermalidades negativas que a veces incomodan, pero que tarde o temprano desaparecen tragadas por el reflujo mediático, el juego del poder y su disfraz de democracia.

Urge una nueva rebelión de las víctimas. Quizás el movimiento feminista, que ha tomado la punta de lanza en la resistencia, pueda convocarla. Quizá pueda llamamos a todas. Quizá. En todo caso, urge frente a la inhumanidad del Estado.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos